



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

13 de junio de 2025

Núm. 234-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY

122/000197 Proposición de Ley para el reconocimiento de la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y del impulso del autoconsumo.

Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano

Proposición de Ley para el reconocimiento de la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y del impulso del autoconsumo.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo dispuesto en los artículos 124 y siguientes, del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente Proposición de Ley para el reconocimiento de la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y del impulso del autoconsumo, para el debate de la misma en el Pleno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2025.—**Teresa Jordà i Roura**, Diputada.—**Gabriel Rufián Romero**, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD PÚBLICA
DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y DEL IMPULSO
DEL AUTOCONSUMO

Exposición de motivos

La red de distribución eléctrica constituye un elemento clave del sistema energético, sin el cual no resulta posible garantizar un suministro continuo, suficiente, de calidad y universal. Se trata, por tanto, de una infraestructura estratégica, cuya importancia se acentúa en un contexto de transición energética, electrificación de la economía y lucha contra la emergencia climática. Por este motivo, el ordenamiento jurídico español, en consonancia con el europeo, reconoce que el suministro eléctrico es un servicio de interés económico general (SIEG), e impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la prestación del mismo en condiciones de equidad, eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Sin embargo, este reconocimiento no se refleja adecuadamente en la actual estructura del sistema de distribución eléctrica. La red se encuentra hoy en día en manos de un número muy reducido de empresas privadas, organizadas en grupos integrados de forma vertical, que desempeñan simultáneamente funciones de generación, distribución y comercialización. Esta concentración genera una posición de dominio de facto, limita el desarrollo de un mercado competitivo en las actividades liberalizadas y obstaculiza la democratización del sistema energético.

Asimismo, las redes eléctricas no sólo transportan energía, sino también información sensible sobre los consumidores y el sistema, lo que las convierte en infraestructuras críticas. Cualquier fallo o desinversión en su mantenimiento puede afectar a servicios esenciales, sectores estratégicos o incluso a la seguridad pública. Sin embargo, el actual modelo de gestión no garantiza el control público necesario sobre estas infraestructuras, ni facilita la intervención de los poderes locales o de la ciudadanía organizada.

Aunque la Constitución española no reconozca el derecho al acceso a la energía como derecho fundamental, el marco internacional sí reconoce el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles como condición esencial para una vida digna. Así lo establece, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, que reconoce el derecho a disponer de energía en condiciones de dignidad.

Ante este escenario, el análisis comparado de los modelos europeos ofrece ejemplos valiosos y contrastados que demuestran la viabilidad, eficiencia y conveniencia de los modelos de titularidad y gestión públicas o mixtas de la distribución eléctrica. En Francia, la red es de titularidad local; en los Países Bajos, la ley prohíbe la privatización de la red; en Dinamarca y Alemania, la presencia de cooperativas y municipios es clave. Este contraste evidencia la anomalía del modelo español, altamente concentrado y con escaso control público.

Para dar respuesta a esta realidad, la presente ley propone una reforma integral del marco normativo vigente, con el objetivo de reconocer la titularidad pública de las redes de distribución y facilitar su gestión directa o mediante concesión por parte de los municipios. A tal efecto, se modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para establecer que las redes de distribución y transporte son de titularidad pública, y para reconocer el derecho de los municipios a gestionarlas. También se introduce un nuevo régimen de concesión para las redes locales con plazos limitados, criterios de selección basados en la calidad del servicio, la integración de renovables y la competencia, y mecanismos de compensación cuando se produzca el relevo entre empresas concesionarias.

Se incorporan, asimismo, nuevos derechos para las Comunidades Ciudadanas de Energía, que podrán adquirir, arrendar y gestionar redes cuando acrediten capacidad técnica y económica y alcancen una cobertura significativa del territorio (60 % de los puntos de suministro o de la energía, en ámbitos con más de 10.000 usuarios). Esta capacidad de participación activa de la ciudadanía organizada se complementa con el

reconocimiento del derecho a negociar con el operador existente y obtener una compensación ajustada al valor contable de los activos transferidos.

También se establece un nuevo régimen de cesión de instalaciones derivadas de transformaciones urbanísticas: cuando la nueva red tenga más de 500 CUPS o 5 MW de potencia, la titularidad será municipal. Además, los municipios tendrán derecho a percibir el 50 % de los beneficios de explotación de las infraestructuras cedidas.

Para evitar conflictos de interés, se refuerza la separación efectiva de actividades dentro de los grupos empresariales, estableciendo la prohibición de participación simultánea en generación, comercialización y distribución, con la salvedad de pequeños operadores locales con menos de 100.000 clientes.

Por otra parte, se modifica la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para incluir entre las competencias propias de los municipios la gestión de la red de distribución de energía eléctrica, así como el suministro a través de comunidades energéticas. Esta incorporación refuerza la legitimidad y capacidad de los ayuntamientos para actuar en un sector estratégico para el desarrollo local y la soberanía energética.

La reforma se completa con modificaciones del Real Decreto 1955/2000, regulando la actividad de distribución, para definir el concepto de zona eléctrica de distribución vinculada a un territorio concreto, y para introducir los mecanismos de concesión, control y coordinación entre operadores públicos y privados. También se reconoce la capacidad de las comunidades energéticas para actuar como distribuidoras en régimen de servicio público, y se actualiza el artículo 79 para permitir que éstas puedan suministrar energía a terceros, rompiendo las barreras que hasta ahora lo impedían.

Por último, se modifica el Real Decreto 244/2019, en materia de autoconsumo, para ampliar las distancias permitidas entre las instalaciones de generación y consumo en el caso de autoconsumo colectivo, especialmente en municipios pequeños y entornos rurales, y para permitir la compatibilidad entre diferentes modalidades de autoconsumo dentro de un mismo entorno industrial o vecinal. Estas medidas permiten maximizar el uso de cubiertas, promover alianzas locales y favorecer a las comunidades energéticas empresariales.

Con esta ley, no sólo se pretende cumplir con los compromisos comunitarios y facilitar la descarbonización del sistema eléctrico, sino también garantizar una gobernanza energética pública, transparente y cercana a la ciudadanía. Se trata de una apuesta sólida para corregir déficits históricos del modelo español y abrir la puerta a una transición energética justa, democrática y arraigada en el territorio.

ARTICULADO

Artículo primero. *Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.*

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico queda modificada como sigue.

Uno. Se sustituye en todo el texto de la Ley la expresión «empresas distribuidoras» por «los gestores de red», en todas las formas en las que aparece en el preámbulo, texto articulado y disposiciones, con las adaptaciones gramaticales necesarias.

Dos. Se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 2, que quedan redactados en los términos siguientes:

«1. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en esta ley sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse para las actividades que tengan carácter de monopolio natural. Sin perjuicio de su propiedad civil y gestión, atendiéndonos a su naturaleza de monopolio natural, la titularidad de las redes de distribución y transporte de electricidad es pública.

2. El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general. Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica continuo, suficiente y con un coste razonable sujeto a indemnización en los casos de servicio defectuoso.»

Tres. Se modifica el apartado e) del punto 1 del artículo 6, que queda redactado en los términos siguientes:

«e) Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles y comunidades energéticas o sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, cuya función es distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo y todas aquellas funciones que se recogen en el artículo 40.»

Cuatro. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 12. *Separación de actividades.*

1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades de transporte, distribución y operación del sistema a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 tendrán que tener como objeto social exclusivo su desarrollo, sin que, por tanto, puedan llevar a cabo actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en empresas que lleven a cabo estas actividades.

2. Un grupo empresarial no podrá desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la ley, aunque las ejerzan sociedades distintas pertenecientes al mismo grupo.

3. Las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo no serán de aplicación en el caso de aquellas sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades de transporte, distribución y operación del sistema a las que se refiere el apartado 2 del artículo 8, cuando éstas tengan menos de 100.000 clientes conectados.»

Cinco. Se modifica el punto 1 del artículo 38, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La actividad de distribución de energía eléctrica es aquella cuyo objetivo es la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte, o en su caso desde otras redes de distribución o desde la generación conectada a la misma red de distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución en las condiciones adecuadas de calidad, con la finalidad última de suministrarla a los consumidores.

La titularidad de la red eléctrica es pública. Los municipios serán titulares de las redes de distribución que operen en su ámbito territorial y podrán concesionar sus servicios.

Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar funciones de coordinación de la actividad que desarrollen los diferentes gestores, que podrán ser sus titulares o concesionarios de la gestión cuando el municipio lo considere adecuado.

Los distribuidores serán los gestores de las redes de distribución de las zonas de distribución que operen durante el período en que sean concesionarios de su gestión según el procedimiento previsto en el artículo 38 bis.»

Seis. Se añade un nuevo artículo 38 bis, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 38 bis. *Régimen de concesión.*

1. La gestión de las redes de distribución de cada zona eléctrica de distribución será objeto de concesión administrativa según se contempla en el presente artículo.

2. Las concesiones se otorgarán con una duración máxima de 10 años por medio de un procedimiento de licitación que, al amparo del derecho europeo aplicable, favorezca la competencia efectiva y se guíe por los objetivos de calidad del servicio, transparencia e integración de las energías renovables en un modelo de generación distribuido.

3. Cuando el concesionario no sea el mismo sujeto que el concesionario anterior, o en su caso que el distribuidor de origen, el concesionario entrante deberá compensar económicamente al concesionario anterior, o en su caso al distribuidor de origen, por las inversiones efectivamente realizadas en la red de distribución durante el período de gestión previo que no hayan sido ya compensadas mediante la retribución a la actividad de distribución según la normativa aplicable.»

Siete. Se modifica el punto 3 del artículo 39, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución.

Cuando la nueva red suministre a más de 500 CUP o tenga más de 5 MW de potencia contratada, la titularidad de la red corresponderá al municipio, pudiendo llevar a cabo la gestión y el desarrollo de la red de forma directa o en régimen de concesión.

Cuando la nueva red suministre a menos de 500 CUPS, tendrán que cederse a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad y de la calidad del suministro. Esta infraestructura quedará abierta al uso de terceros.

Cuando haya varios distribuidores en la zona a los que se les puedan ceder las instalaciones construidas por un promotor, la administración pública competente sobre la autorización de estas redes determinará a cuál de estos distribuidores deberán cederse, con carácter previo a su ejecución, siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del sistema, competencia, evitar la posición de dominio, mejores rangos de servicio en lectura de contadores, legalización de autoconsumo, mercados de flexibilidad y agregación, y aquellos que establezca de forma reglamentaria la administración general del estado. Esta infraestructura quedará abierta al uso de terceros.

La distribuidora deberá ceder el 50 % de los beneficios de explotación de las infraestructuras cedidas, de conformidad con el último párrafo, en el municipio donde se ubiquen.

Cuando en una nueva área a electrificar existan varios distribuidores que quieran desarrollarla, y siempre que se trate de una red que suministre a menos de 500 CUPS o 5 MWP, la administración pública competente según el criterio de red única, competencia, evitar la posición de dominio, mejores rangos de servicio en lectura de contadores, legalización de autoconsumo, mercados de flexibilidad y agregación, y aquellos que establezca la administración general del estado, y considerando el carácter de monopolio natural de la actividad y con el objetivo de generar el menor coste de retribución para el conjunto del sistema, la competencia y el no abuso de la posición de dominio determinará con carácter previo a la ejecución de las instalaciones cuál de las empresas distribuidoras deberá llevar su desarrollo. En cualquier caso, la autoridad competente tendrá la facultad de

encargar al municipio el desarrollo del proyecto para que gestione la red de forma directa o indirecta.»

Ocho. Se añaden dos nuevos apartados en el artículo 39, que quedan redactados en los siguientes términos:

«5. Las Comunidades Ciudadanas de Energía tendrán derecho a adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas de forma autónoma. Para ello, tendrán derecho a celebrar un acuerdo sobre la gestión de su red con el gestor de la red de distribución o el gestor de la red de transporte correspondiente al que esté conectada su red, pactando a una compensación justa a tal efecto. Esta compensación se basará en el valor residual contable auditado de los activos implicados del ejercicio anterior al del momento de la petición.

6. Cuando una Comunidad Ciudadana de Energía garantice un nivel de competencias técnico y económico que se certifiquen adecuados a la responsabilidad que se asume de la gestión de las redes y cuando llegue al 60 % de los CUPS o de la energía suministrada en su ámbito de actuación, siempre que el alcance sea superior a los 10.000 puntos de suministro, se establecerá un mecanismo de red distribución en dicho territorio. La administración pública competente determinará los mecanismos para el cambio de titularidad y gestión en favor de la comunidad energética de la red de distribución.»

Nueve. Se añade una nueva disposición transitoria, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria decimoséptima.

Las concesiones administrativas para la gestión de las zonas de distribución tendrán que licitarse no más tarde del 31 de diciembre de 2026.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Se añade un nuevo apartado en el punto 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local queda redactado como sigue:

«p) En energía y en suministro de energía eléctrica mediante las comunidades energéticas y también mediante la gestión de la red de distribución.»

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, queda modificado como sigue.

Uno. Se modifica el punto 2 del artículo 36, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. La actividad de distribución será llevada a cabo por los distribuidores o por comunidades energéticas (CER y CCE), que son aquellas sociedades mercantiles, administraciones o comunidades energéticas, que tienen como objetivo distribuir energía eléctrica, así como construir, operar y mantener las instalaciones de distribución y vender energía eléctrica a tarifa, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 54/1997, 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 7

Dos. Se añade un nuevo artículo 37 bis, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 37 bis. *Titularidad y gestión de la red de distribución.*

1. El ejercicio del derecho a adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas de forma autónoma por parte de las Comunidades Energéticas.

A tal efecto, tendrán derecho a celebrar un acuerdo sobre la gestión de su red con el gestor de la red de distribución o el gestor de la red de transporte correspondiente al que esté conectada la red, pactando una compensación justa.

Esta compensación se basará en el valor residual contable auditado de los activos implicados del ejercicio anterior al del momento de la petición.

Las Comunidades Energéticas estarán sujetas a tarifas de acceso a la red adecuadas en los puntos de conexión entre su red y la red de distribución externa a la comunidad ciudadana de energía; y que en estas tarifas de acceso a la red se contabilicen por separado la electricidad introducida en la red de distribución y la electricidad consumida procedente de la red de distribución fuera de la comunidad ciudadana de energía, respetando la transparencia en el mercado.

En este sentido, serán de aplicación únicamente el término de potencia de los peajes de acceso a la red, y el término de energía únicamente para la electricidad no autoconsumida que provenga de la red en balance mensual.

La autoridad reguladora será la autoridad competente en materia de energía de cada comunidad autónoma para comunidades que accedan a la red de distribución y que la totalidad de sus socios sean de la misma comunidad autónoma. Para el resto de CCE, la autoridad competente será la Dirección General de Política Energética.

2. Cuando una Comunidad Energética llegue al 60 % de los CUPS o de la energía suministrada en su ámbito de actuación, siempre que el alcance sea superior a los 10.000 puntos de suministro, se establecerá un mecanismo para que la Comunidad Energética pueda ejercer el derecho de gestionar la red de distribución de dicho territorio.

3. La administración competente de la autorización administrativa de las instalaciones de distribución deberá emitir en el plazo de 30 días desde la petición expresa por parte de la comunidad ciudadana de energía para la gestión de la red de distribución, de forma consecutiva y obligada, la concesión correspondiente en el ámbito territorial que incluya todos los partícipes de la Comunidad Energética, de acuerdo con el apartado b) del artículo 37 del RD 1955/2000.

4. El precio de compraventa de la instalación se acordará entre las partes y estará basado en los costes en los que efectivamente se haya incurrido por el transmisor hasta la fecha de la referida resolución del Director General de Política Energética y Minas que determine la ejecución del aval y la imposibilidad de percepción del régimen económico.

Se fijará un mecanismo de garantía por parte de la CNMC que establecerá un precio y la obligación de cesión por parte de la distribuidora a favor de la CCE para cuando no exista acuerdo.

5. Con el objetivo de garantizar esta cesión se faculta a la ministra de Transición Energética y el Reto Demográfico la posibilidad de dictar una orden por la que se imponga a la empresa titular la obligación de transmitirla a la CCE.

6. En atención a la naturaleza de las CCE, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deberá aprobar la retribución que le corresponda para el ejercicio de su actividad, según dispone la Ley 54/1997 y su normativa de desarrollo en función de las instalaciones que tenga autorizadas en cada momento de acuerdo con el apartado c) del artículo 37 del RD 1955/2000.

7. Se entenderá por zona eléctrica de distribución de las CCE el conjunto de instalaciones de distribución pertenecientes a la CCE cuyo objetivo último es

permitir el suministro de energía eléctrica a los partícipes de la CCE en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, a los efectos del artículo 39 del RD 1955/2000.»

Tres. Se modifica el artículo 39, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 39. *Zonas eléctricas de distribución.*

1. A efectos del presente Real Decreto, salvo en lo que se refiere a las zonas establecidas para la determinación de la calidad del servicio zonal, se entenderá por zona eléctrica de distribución el conjunto de instalaciones pertenecientes a un mismo municipio, consorcio de entes locales o gobierno autonómico, cuando haya concesionado con una misma distribuidora (ya sea empresa, cooperativa, comunidad de energética o empresa pública) y cuyo objeto último sea permitir el suministro de energía eléctrica a los consumidores en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad.

2. El gestor de la red de distribución en cada una de las zonas eléctricas de distribución será la distribuidora que haya concesionado el servicio de gestión en la distribución, sin perjuicio de que se pueda llegar a acuerdos entre distribuidoras o municipios para la designación de un único gestor de red de distribución para diversas zonas eléctricas de distribución. Estos acuerdos se pondrán en conocimiento de la administración competente.»

Cuatro. Se modifica el punto 3 del artículo 79, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. El contrato de suministro es personal, y su titular deberá ser el usuario efectivo de la energía, que no podrá utilizar en un lugar distinto al que fue contratada, ni cederla, ni venderla a terceros.

Se exceptúan de estas limitaciones las empresas distribuidoras a las que sea de aplicación la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997, las comunidades de energías renovables, las comunidades ciudadanas de energía y aquellos otros sujetos que lo hicieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 54/1997, siempre que estuviesen autorizados por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía.»

Artículo cuarto. *Modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.*

El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, queda modificado como sigue.

Uno. Se modifica la letra g) del artículo 3, que queda redactada como sigue:

«g) Instalación de producción cercana a las de consumo y asociada a las mismas: Instalación de producción o generación destinada a generar energía eléctrica para suministrar a uno o más consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo en las que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

i. Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a éstos mediante líneas directas.

ii. Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivadas del mismo centro de transformación.

iii. Se encuentren conectadas a una distancia inferior a 2.000 metros de los consumidores asociados y la potencia instalada sea inferior o igual a 5 MW. A tal

efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.

Asimismo, tendrá la consideración de instalación de producción cercana a las de consumo y asociada a través de la red aquella planta de generación que, empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada íntegramente en la cubierta de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras artificiales existentes o futuras cuyo objetivo principal no sea la generación de electricidad, se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o distribución, y siempre que se encuentre dentro de una de las distancias siguientes:

a) Distancia inferior a 2.000 metros de los consumidores asociados para instalaciones ubicadas en municipios con más de 10.000 habitantes. b) Distancia inferior a 10.000 metros de los consumidores asociados para instalaciones ubicadas en municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

c) Distancia inferior a 20.000 metros de los consumidores asociados para instalaciones ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.

iv. Estén ubicados, tanto la generación como los consumos, en una misma referencia catastral según sus primeros 14 dígitos o, en su caso, según lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Las instalaciones cercanas y asociadas que cumplan la condición y de esta definición se denominarán instalaciones cercanas de red interior.

Las instalaciones cercanas y asociadas que cumplan las condiciones ii, iii o iv de esta definición se denominarán instalaciones cercanas a través de la red.»

Dos. Se modifica el punto 5 del artículo 4, que queda redactado como sigue:

«5. Los sujetos acogidos a alguna de las modalidades de autoconsumo reguladas podrán acogerse a cualquier otra modalidad distinta, adecuando sus instalaciones y ajustándose a lo dispuesto en los regímenes jurídicos, técnicos y económicos regulados en este real decreto y en el resto de normativa que les sea de aplicación.

Sin embargo:

i. En el caso de autoconsumo colectivo, este cambio deberá realizarse simultáneamente por todos los consumidores participantes, asociados a la propia instalación de generación.

ii. En aquellos casos en los que se realice autoconsumo mediante instalaciones cercanas y asociadas a través de la red, el autoconsumo deberá pertenecer a la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes.»

Disposición adicional nueva. *Apoyo técnico y jurídico a los entes locales para la gestión y licitación de las redes de distribución eléctrica.*

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de la autonomía local y facilitar la transición energética con criterios de proximidad, sostenibilidad y soberanía energética, el Gobierno establecerá un mecanismo permanente de apoyo técnico, jurídico y administrativo dirigido a los ayuntamientos, especialmente los de menor población y capacidad técnica, que decidan gestionar directamente o licitar la concesión de la red de distribución eléctrica de titularidad municipal.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 10

Este mecanismo se desarrollará por el ministerio competente en materia de energía, en colaboración con las comunidades autónomas, las diputaciones y las entidades municipalistas representativas, y estará operativo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que contradigan o se opongan a lo que dispone la presente ley.

Disposición final primera. *Habilitación normativa.*

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución del contenido de esta ley.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa del Congrés dels Diputats

El Grup Parlamentari Republicà, a instància del de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de Llei per el reconeixement de la titularitat pública de les xarxes de distribució elèctrica i d'impuls de l'autoconsum pel seu debat en Ple.

Congrés dels Diputats, a 22 maig de 2025.—**Teresa Jordà i Roura**, Diputada.—**Gabriel Rufián Romero**, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

PROPOSICIÓ DE LLEI PER EL RECONeixEMENT DE LA TITULARITAT PÚBLICA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I D'IMPULS DE L'AUTOCONSUM

Exposició de motius

La xarxa de distribució elèctrica constitueix un element clau del sistema energètic, sense el qual no és possible garantir un subministrament continu, suficient, de qualitat i universal. Es tracta, per tant, d'una infraestructura estratègica, la importància de la qual s'accentua en un context de transició energètica, electrificació de l'economia i lluita contra l'emergència climàtica. Per aquest motiu, l'ordenament jurídic espanyol, en sintonia amb l'europeu, reconeix el subministrament elèctric com un servei d'interès econòmic general (SIEG), i imposa als poders públics l'obligació de garantir-ne la prestació en condicions d'equitat, eficiència, qualitat i sostenibilitat.

Tanmateix, aquest reconeixement no es reflecteix adequadament en l'estructura actual del sistema de distribució elèctrica. La xarxa es troba avui dia en mans d'un nombre molt reduït d'empreses privades, organitzades en grups verticalment integrats, que exerceixen simultàniament funcions de generació, distribució i comercialització. Aquesta concentració genera una posició de domini de facto, limita el desenvolupament d'un mercat competitiu en les activitats liberalitzades i obstaculitza la democratització del sistema energètic.

A més, les xarxes elèctriques no només transporten energia, sinó també informació sensible sobre els consumidors i el sistema, cosa que les converteix en infraestructures crítiques. Qualsevol fallada o desinversió en el seu manteniment pot afectar serveis

essencials, indústries estratègiques o fins i tot la seguretat pública. Tot i això, l'actual model de gestió no garanteix el control públic necessari sobre aquestes infraestructures, ni facilita la intervenció dels poders locals o de la ciutadania organitzada.

Encara que la Constitució espanyola no reconegui el dret a l'accés a l'energia com un dret fonamental, el marc internacional sí que reconeix l'accés a serveis energètics moderns i assequibles com a condició essencial per a una vida digna. Així ho estableix, per exemple, la Declaració Universal dels Drets Humans Emergents, que reconeix el dret a disposar d'energia en condicions de dignitat.

Davant d'aquest escenari, l'anàlisi comparat dels models europeus ofereix exemples valuosos i contrastats que demostren la viabilitat, eficiència i conveniència dels models de titularitat i gestió públiques o mixtes de la distribució elèctrica. A França, la xarxa és de titularitat local; als Països Baixos, la llei prohibeix la privatització de la xarxa; a Dinamarca i Alemanya, la presència de cooperatives i municipis és clau. Aquest contrast evidencia l'anomalia del model espanyol, altament concentrat i amb escàs control públic.

Per donar resposta a aquesta realitat, la present llei proposa una reforma integral del marc normatiu vigent, amb l'objectiu de reconèixer la titularitat pública de les xarxes de distribució i de facilitar la seva gestió directa o mitjançant concessió per part dels municipis. A tal efecte, es modifica la Llei 24/2013, del Sector Elèctric, per establir que les xarxes de distribució i transport són de titularitat pública, i per reconèixer el dret dels municipis a gestionar-les. També s'hi introdueix un nou règim de concessió per a les xarxes locals amb terminis limitats, criteris de selecció basats en la qualitat del servei, la integració de renovables i la competència, i mecanismes de compensació quan es produeixi relleu entre concessionaris.

S'incorporen, a més, nous drets per a les Comunitats Ciutadanes d'Energia, que podran adquirir, arrendar i gestionar xarxes quan acreditin capacitat tècnica i econòmica i arribin a una cobertura significativa del territori (60 % dels punts de subministrament o de l'energia, en àmbits amb més de 10.000 usuaris). Aquesta capacitat de participació activa de la ciutadania organitzada es complementa amb el reconeixement del dret a negociar amb l'operador existent i a obtenir una compensació ajustada al valor comptable dels actius transferits.

També s'estableix un nou règim de cessió d'instal·lacions derivades de transformacions urbanístiques: quan la nova xarxa tingui més de 500 CUPS o 5 MW de potència, la titularitat serà municipal. A més, els municipis tindran dret a percebre el 50 % dels beneficis d'exploatació de les infraestructures cedides.

Per evitar conflictes d'interès, es reforça la separació efectiva d'activitats dins dels grups empresarials, establint la prohibició de participació simultània en generació, comercialització i distribució, amb l'excepció de petits operadors locals amb menys de 100.000 clients.

D'altra banda, es modifica la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, per incloure entre les competències pròpies dels municipis la gestió de la xarxa de distribució d'energia elèctrica, així com el subministrament a través de comunitats energètiques. Aquesta incorporació reforça la legitimitat i capacitat dels ajuntaments per actuar en un sector estratègic per al desenvolupament local i la sobirania energètica.

La reforma es completa amb modificacions del Reial decret 1955/2000, que regula l'activitat de distribució, per definir el concepte de zona elèctrica de distribució vinculada a un territori concret, i per introduir els mecanismes de concessió, control i coordinació entre operadors públics i privats. També s'hi reconeix la capacitat de les comunitats energètiques per actuar com a distribuïdores en règim de servei públic, i s'actualitza l'article 79 per permetre que aquestes puguin subministrar energia a tercers, trencant barreres que fins ara ho impediën.

Finalment, es modifica el Reial decret 244/2019, sobre l'autoconsum, per ampliar les distàncies permeses entre les instal·lacions de generació i consum en el cas d'autoconsum col·lectiu, especialment en municipis petits i entorns rurals, i per permetre la compatibilitat entre diferents modalitats d'autoconsum dins d'un mateix entorn industrial o veïnal. Aquestes mesures permeten maximitzar l'ús de cobertes, promoure aliances locals i afavorir les comunitats energètiques empresarials.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 12

Amb aquesta llei, no només es pretén complir amb els compromisos comunitaris i facilitar la descarbonització del sistema elèctric, sinó també garantir una governança energètica pública, transparent i pròxima a la ciutadania. És una aposta decidida per corregir dèficits històrics del model espanyol i obrir la porta a una transició energètica justa, democràtica i arrelada al territori.

ARTICULAT

Article primer. *Modificació de la Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector Elèctric.*

La Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector Elèctric queda modificada com segueix.

U. Es substitueix en tot el text de la Llei l'expressió «empreses distribuïdores» per «els gestors de xarxa», en totes les formes en què apareix en el preàmbul, el text articulat i les disposicions, amb les adaptacions gramaticals que calgui.

Dos. Es modifiquen el punt 1 i 2 de l'article 2, que queden redactats en els termes següents:

«1. Es reconeix la lliure iniciativa empresarial per a l'exercici de les activitats destinades al subministrament d'energia elèctrica regulades en aquesta llei la sense perjudici de les limitacions que es puguin establir per a les activitats que tinguin caràcter de monopoli natural. Sense perjudici de la seva propietat civil i gestió, atenint-nos a la seva naturalesa de monopoli natural, la titularitat de les xarxes de distribució i transport d'electricitat és pública.

2. El subministrament d'energia elèctrica constitueix un servei d'interès econòmic general. Tota persona té dret al subministrament d'energia elèctrica continu, suficient i amb un cost raonable subjecte a indemnització en els casos de servei defectuós.»

Tres. Es modifica l'apartat e) del punt 1 de l'article 6, que queda redactat en els termes següents:

«e) Els distribuïdors, que són aquelles societats mercantils i comunitats energètiques o societats cooperatives de consumidors i usuaris, que tenen la funció de distribuir energia elèctrica, així com construir, mantenir i operar les instal·lacions de distribució destinades a situar l'energia en els punts de consum i totes aquelles funcions que es recullen a l'article 40.»

Quatre. Es modifica l'article 12, que queda redactat en els termes següents:

«Article 12. *Separació d'activitats.*

1. Les societats mercantils que desenvolupin alguna o algunes de les activitats de transport, distribució i operació del sistema a què es refereix l'apartat 2 de l'article 8 hauran de tenir com a objecte social exclusiu el seu desenvolupament, sense que, per tant, puguin portar a terme activitats de producció, de comercialització o de serveis de recàrrega energètica, ni prendre participacions en empreses que portin a terme aquestes activitats.

2. Un grup empresarial no podrà desenvolupar activitats incompatibles d'acord amb la llei, encara que les exerceixin societats diferents pertanyents al mateix grup.

3. Les obligacions establertes als apartats 1 i 2 del present article no s'aplicaran en el cas de les societats mercantils que desenvolupin alguna o algunes de les activitats de transport, distribució i operació del sistema a les que es refereix l'apartat 2 de l'article 8, quan aquestes tinguin menys de 100.000 clients connectats.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 13

Cinc. Es modifica el punt 1 de l'article 38, que queda redactat en els termes següents:

«1. L'activitat de distribució d'energia elèctrica és aquella que té com a objectiu la transmissió d'energia elèctrica des de les xarxes de transport, o en el seu cas des d'altres xarxes de distribució o des de la generació connectada a la mateixa xarxa de distribució, fins als punts de consum o altres xarxes de distribució en les condicions adequades de qualitat, amb la finalitat última de subministrar-la als consumidors.

La titularitat de la xarxa elèctrica és pública. Els municipis seran titulars de les xarxes de distribució que operen en el seu àmbit territorial i podran concessionarne els serveis.

Les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències, podran realitzar funcions de coordinació de l'activitat que desenvolupin els diferents gestors, que en podran ser els titulars o concessionaris de la gestió quan el municipi ho consideri adient.

Els distribuïdors seran els gestors de les xarxes de distribució de les zones de distribució que operin durant el període en què siguin concessionaris de la seva gestió segons el procediment previst en l'article 38 bis.»

Sis. S'afegeix un nou article 38 bis, que queda redactat en els termes següents:

«Article 38 bis. *Règim de concessió.*

1. La gestió de les xarxes de distribució de cada zona elèctrica de distribució serà objecte de concessió administrativa segons es preveu en el present article.

2. Les concessions s'atorgaran amb una durada màxima de 10 anys per mitjà d'un procediment de licitació que, a l'empara del dret europeu aplicable, afavoreixi la competència efectiva i es guiï pels objectius de qualitat del servei, transparència i integració de les energies renovables en un model de generació distribuït.

3. Quan el concessionari no sigui el mateix subjecte que el concessionari anterior, o en el seu cas que el distribuïdor d'origen, el concessionari entrant haurà de compensar econòmicament el concessionari anterior, o en el seu cas el distribuïdor d'origen, per les inversions efectivament fetes en la xarxa de distribució durant el període de gestió previ que no hagin estat ja compensades mitjançant la retribució a l'activitat de distribució segons la normativa aplicable.»

Set. Es modifica el punt 3 de l'article 39, que queda redactat en els termes següents:

«3. Totes les instal·lacions destinades a més d'un consumidor tindran la consideració de xarxa de distribució.

Quan la nova xarxa subministri a més de 500 CUP o tingui més de 5 MW de potència contractada, la titularitat de la xarxa correspondrà al municipi, i podrà portar a terme la gestió i el desenvolupament de la xarxa de manera directa o en règim de concessió.

Quan la nova xarxa subministri a menys de 500 CUPS, hauran de ser cedides a l'empresa distribuïdora de la zona, la qual respondrà de la seguretat i de la qualitat del subministrament. Aquesta infraestructura quedarà oberta a l'ús de tercers.

Quan hi hagi diversos distribuïdors a la zona als quals se'ls puguin cedir les instal·lacions construïdes per un promotor, l'administració pública competent sobre l'autorització d'aquestes xarxes determinarà a quin d'aquests distribuïdors s'hauran de cedir, amb caràcter previ a la seva execució, seguint criteris de mínim cost per al conjunt del sistema, competència, evitar la posició de domini, millors rangs de servei en lectura de comptadors, legalització d'autoconsum, mercats de

flexibilitat i agregació, i aquells que estableixi de manera reglamentària l'administració general de l'estat. Aquesta infraestructura quedarà oberta a l'ús de tercers.

La distribuïdora haurà de cedir el 50 % dels beneficis d'explotació de les infraestructures cedides, de conformitat amb l'últim paràgraf, al municipi on s'ubiquin.

Quan en una nova àrea a electrificar hi hagi diversos distribuïdors que la vulguin desenvolupar, i sempre que es tracti d'una xarxa que subministri a menys de 500 CUPS o 5 MWP, l'administració pública competent sota el criteri de xarxa única, competència, evitar la posició de domini, millors rangs de servei en lectura de comptadors, legalització d'autoconsum, mercats de flexibilitat i agregació, i aquells que estableixi de manera reglamentària l'administració general de l'estat, i considerant el caràcter de monopoli natural de l'activitat i amb l'objectiu de generar el menor cost de retribució per al conjunt del sistema, la competència i el no abús de la posició de domini determinarà amb caràcter previ a l'execució de les instal·lacions quina de les empreses distribuïdores haurà de portar-ne el desenvolupament. En qualsevol cas, l'autoritat competent tindrà la facultat d'encarregar al municipi el desenvolupament del projecte perquè gestioni la xarxa de manera directa o indirecta.»

Vuit. S'afegeixen dos nous apartats a l'article 39, que queden redactats en els termes següents:

«5. Les Comunitats Ciutadanes d'Energia tindran dret d'adquirir o arrendar xarxes de distribució i gestionar-les de manera autònoma. Per a això, tindran dret de celebrar un acord sobre la gestió de la seva xarxa amb el gestor de la xarxa de distribució o el gestor de la xarxa de transport corresponent a què estigui connectada la seva xarxa, pactant a una compensació justa a tal efecte. Aquesta compensació es basarà en el valor residual comptable auditat dels actius implicats de l'exercici anterior al del moment de la petició.

6. Quan una Comunitat Ciutadana d'Energia garanteixi un nivell de competències tècnic i econòmic que se certifiquen adequats a la responsabilitat que s'assumeix de la gestió de les xarxes i quan arribi al 60 % dels cups o de l'energia subministrada en el seu àmbit d'actuació, sempre que l'abast sigui superior als 10.000 punts de subministrament, s'establirà un mecanisme perquè la CCE pugui exercir el dret de ser titular i gestionar la xarxa de distribució en el territori esmentat. L'administració pública competent determinarà els mecanismes per al canvi de titularitat i gestió a favor de la comunitat energètica de la xarxa de distribució.»

Nou. S'afegeix una nova disposició transitòria, que queda redactada en els termes següents:

«Disposició transitòria dissetena.

Les concessions administratives per la gestió de les zones de distribució hauran de ser licitades no més tard del 31 de desembre de 2026».

Article segon. *Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.*

S'afegeix un nou apartat al punt 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local queda redactat com segueix:

«p) En energia i en subministrament d'energia elèctrica mitjançant les comunitats energètiques i també mitjançant la gestió de la xarxa de distribució.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 15

Article tercer. *Modificació del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.*

El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica queda modificat com segueix.

U. Es modifica el punt 2 de l'article 36, que queda redactat en els termes següents:

«2. L'activitat de distribució serà portada a terme pels distribuïdors o per comunitats energètiques (CER i CCE), que són aquelles societats mercantils, administracions o comunitats energètiques, que tenen com a objectiu distribuir energia elèctrica, així com construir, operar i mantenir les instal·lacions de distribució i vendre energia elèctrica a tarifa, en els termes previstos a l'article 9 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.»

Dos. S'afegeix un nou article 37 bis, que queda redactat en els termes següents:

«Article 37 bis. *Titularitat i gestió de la xarxa de distribució.*

1. L'exercici del dret a adquirir o arrendar xarxes de distribució i gestionar-les de manera autònoma per part de les Comunitats Energètiques.

A tal efecte, tindran dret a celebrar un acord sobre la gestió de la seva xarxa amb el gestor de la xarxa de distribució o el gestor de la xarxa de transport corresponent a què estigui connectada la xarxa, pactant-ne una compensació justa.

Aquesta compensació es basarà en el valor residual comptable auditat dels actius implicats de l'exercici anterior al del moment de la petició.

Les Comunitats Energètiques estaran subjectes a tarifes d'accés a la xarxa adequades en els punts de connexió entre la seva xarxa i la xarxa de distribució externa a la comunitat ciutadana d'energia; i que en aquestes tarifes d'accés a la xarxa es comptabilitzin per separat l'electricitat introduïda a la xarxa de distribució i l'electricitat consumida procedent de la xarxa de distribució fora de la comunitat ciutadana d'energia, respectant la transparència en el mercat.

En aquest sentit, seran d'aplicació únicament el terme de potència dels peatges d'accés a la xarxa, i el terme d'energia únicament per a l'electricitat no autoconsumida que provingui de la xarxa en balanç mensual.

L'autoritat reguladora serà l'autoritat competent en matèria d'energia de cada comunitat autònoma per a comunitats que accedeixen a la xarxa de distribució i que la totalitat dels seus socis siguin de la mateixa comunitat autònoma. Per a la resta de les CCE, l'autoritat competent serà la Direcció General de Política Energètica.

2. Quan una Comunitat Energètica arribi al 60 % dels cups o de l'energia subministrada en el seu àmbit d'actuació, sempre que l'abast sigui superior als 10.000 punts de subministrament, s'establirà un mecanisme per tal que la Comunitat Energètica pugui exercir el dret de gestionar la xarxa de distribució del territori esmentat.

3. L'administració competent de l'autorització administrativa de les instal·lacions de distribució haurà d'emetre en el termini de 30 dies des de la petició expressa per part de la comunitat ciutadana d'energia per a la gestió de la xarxa de distribució, de manera consecutiva i obligada, la concessió corresponent en l'àmbit territorial que inclogui tots els partícips de la Comunitat Energètica, d'acord amb l'apartat b) de l'article 37 del RD 1955/2000.

4. El preu de compravenda de la instal·lació serà acordat entre les parts i estarà basat en els costos en què efectivament s'hagi incorregut pel transmissor fins a la data de la referida resolució del Director General de Política Energètica i

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 16

Mines que determini l'execució de l'aval i la impossibilitat de percepció del règim econòmic.

Es fixarà un mecanisme de garantia per part de la CNMC que establirà un preu i l'obligació de cessió per part de la distribuïdora a favor de la CCE per a quan no hi hagi acord.

5. Amb l'objectiu de garantir aquesta cessió es faculta la ministra de Transició Energètica i Repte Demogràfic la possibilitat de dictar una ordre per la qual s'imposi a l'empresa titular l'obligació de transmetre-la a la CCE.

6. En atenció a la naturalesa de les CCE, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic haurà d'aprovar la retribució que li correspongui per a l'exercici de la seva activitat, segons disposa la Llei 54/1997 i la seva normativa de desenvolupament en funció de les instal·lacions que tingui autoritzades en cada moment d'acord amb l'apartat c) de l'article 37 del RD 1955/2000.

7. S'entendrà per zona elèctrica de distribució de les CCE el conjunt d'instal·lacions de distribució pertanyents a la CCE l'objectiu últim del qual és permetre el subministrament d'energia elèctrica als partícips de la CCE en les condicions adequades de qualitat i seguretat, als efectes de l'article 39 del RD 1955/2000.»

Tres. Es modifica l'article 39, que queda redactat en els termes següents:

«Article 39. *Zones elèctriques de distribució.*

1. A efectes del present Reial Decret, excepte en allò que es refereix en les zones establertes per a la determinació de la qualitat del servei zonal, s'entendrà per zona elèctrica de distribució el conjunt d'instal·lacions pertanyents a un mateix municipi, consorci d'ens locals o govern autonòmic, quan hi hagi concessionat amb una mateixa distribuïdora (ja sigui empresa, cooperativa, comunitat energètica o empresa pública) i l'objecte últim de la qual és permetre el subministrament d'energia elèctrica als consumidors en les condicions adequades de qualitat i seguretat.

2. El gestor de la xarxa de distribució a cada una de les zones elèctriques de distribució serà la distribuïdora que hagi concessionat el servei de gestió en la distribució, sense perjudici que es puguin arribar a acords entre distribuïdores o municipis per a la designació d'un únic gestor de xarxa de distribució per a diverses zones elèctriques de distribució. Aquests acords seran posats en coneixement de l'administració competent.»

Quatre. Es modifica el punt 3 de l'article 79, que queda redactat en els termes següents:

«3. El contracte de subministrament és personal, i el seu titular haurà de ser l'usuari efectiu de l'energia, que no podrà utilitzar en un lloc diferent del qual va ser contractada, ni cedir-la, ni vendre-la a tercers.

S'exceptuen d'aquestes limitacions les empreses distribuïdores a les quals sigui d'aplicació la disposició transitòria onzena de la Llei 54/1997, a les comunitats d'energies renovables, a les comunitats ciutadanes d'energia i aquells altres subjectes que ho fessin amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 54/1997, sempre que estiguessin autoritzats per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Economia.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 234-1

13 de junio de 2025

Pág. 17

Article quart. *Modificació del Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.*

El Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, queda modificat com segueix.

U. Es modifica la lletra g) de l'article 3, que queda redactada com segueix:

«g) Instal·lació de producció propera a les de consum i associada a aquestes: Instal·lació de producció o generació destinada a generar energia elèctrica per subministrar a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum en què es compleixi alguna de les condicions següents:

i. Estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats o estiguin unides a aquests mitjançant línies directes.

ii. Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivades del mateix centre de transformació.

iii. Es trobin connectades a una distància inferior a 2.000 metres dels consumidors associats i la potència instal·lada sigui inferior o igual a 5 MW. A aquest efecte es prendrà la distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.

També tindrà la consideració d'instal·lació de producció propera a les de consum i associada a través de la xarxa aquella planta de generació que, emprant exclusivament tecnologia fotovoltaica ubicada íntegrament a la coberta d'una o diverses edificacions, en sòl industrial o en estructures artificials existents o futures l'objectiu principal de les quals no sigui la generació d'electricitat, es connecti al consumidor o consumidors a través de les línies de transport o distribució, i sempre que es trobi dins d'una de les distàncies següents:

a) Distància inferior a 2.000 metres dels consumidors associats per a instal·lacions ubicades en municipis amb més de 10.000 habitants.

b) Distància inferior a 10.000 metres dels consumidors associats per a instal·lacions ubicades en municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants.

c) Distància inferior a 20.000 metres dels consumidors associats per a instal·lacions ubicades en municipis de menys de 5.000 habitants.

A aquest efecte es prendrà la distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.

iv. Estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral segons els seus primers 14 dígitos o, si escau, segons el que disposa la disposició addicional dissetena del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

Les instal·lacions properes i associades que compleixin la condició i d'aquesta definició es denominaran instal·lacions properes de xarxa interior.

Les instal·lacions properes i associades que compleixin les condicions ii, iii o iv d'aquesta definició es denominaran instal·lacions properes a través de la xarxa.»

Dos. Es modifica el punt 5 de l'article 4, que queda redactat com segueix:

«5. Els subjectes acollits a alguna de les modalitats d'autoconsum regulades podran acollir-se a qualsevol altra modalitat diferent, adequant les seves instal·lacions i ajustant-se al que disposen els règims jurídics, tècnics i econòmics regulats en aquest reial decret i en la resta de normativa que els sigui aplicable.

No obstant això:

i. En el cas d'autoconsum col·lectiu, aquest canvi haurà de ser dut a terme simultàniament per tots els consumidors participants, associats a la mateixa instal·lació de generació.

ii. En aquells casos en què es realitzi autoconsum mitjançant instal·lacions properes i associades a través de la xarxa, l'autoconsum haurà de pertànyer a la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents.»

Disposició addicional nova. *Suport tècnic i jurídic als ens locals per a la gestió i licitació de les xarxes de distribució elèctrica.*

Amb la finalitat de garantir l'exercici efectiu de l'autonomia local i facilitar la transició energètica amb criteris de proximitat, sostenibilitat i sobirania energètica, el Govern establirà un mecanisme permanent de suport tècnic, jurídic i administratiu adreçat als ajuntaments, especialment els de menor població i capacitat tècnica, que decideixin gestionar directament o licitar la concessió de la xarxa de distribució elèctrica de titularitat municipal.

Aquest mecanisme serà desenvolupat pel ministeri competent en matèria d'energia, en col·laboració amb les comunitats autònomes, les diputacions i les entitats municipalistes representatives, i estarà operatiu dins els sis mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que contradiguin o s'oposin al que disposa la present llei.

Disposició final primera. *Habilitació normativa.*

S'autoritza el Govern a dictar les disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i l'execució del contingut d'aquesta llei.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».